

Privatización Energética en Colombia: Impacto, Desigualdad y Desafíos para el Desarrollo Sostenible

Sebastián Dueñas Correa

Juan David García Correa

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales

La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Cartagena, distrito turístico y cultural atractivo para visitantes y declarada por la UNESCO patrimonio histórico y cultural de la humanidad, evoca paraísos, islas afortunadas y una vida sin riesgos, lucha, superación o muerte. Estas fantasías serían inocentes si no representaran los ideales que se buscan en la cotidianidad de visitar este audaz lugar. En la realidad cotidiana, Cartagena alberga el emporio industrial del Mamonal, la zona de desarrollo más importante de la costa Atlántica y una de las principales de Colombia. Este atractivo combina sectores energéticos y el aprovechamiento de recursos naturales y renovables, prometiendo una comunidad humana igualitaria y sin problemas (Zuleta 1980, pág. 5; Unesco 2023).

La contradicción entre las fantasías de felicidad y la realidad de Cartagena resalta un problema fundamental en cómo se imaginan y persiguen los ideales. Mientras los visitantes se sienten atraídos por la idea de un paraíso sin preocupaciones, la verdadera esencia de la ciudad se encuentra en su capacidad de combinar el turismo cultural con el desarrollo industrial. Esta dualidad refleja una tensión entre el deseo de una vida sin desafíos y la necesidad de enfrentar y superar obstáculos para lograr un progreso sostenible. Cartagena, con su riqueza histórica y su dinámica industrial, obliga a reconsiderar las nociones de felicidad y éxito. La verdadera plenitud no reside en escapar de la lucha, sino en encontrar un equilibrio entre la aspiración y la realidad, entre el ideal y la práctica cotidiana (Zuleta 1980, pág. 5; Unesco 2023).

Es fundamental observar con cuánta frecuencia se otorga a uno mismo una no reciprocidad lógica. El acceso a la energía es crucial tanto para las empresas como para las personas; la energía es esencial. Con el actuar de las industrias en Cartagena se conduce a un pensamiento sistémico igualitario y de fácil acceso a necesidades básicas como el acceso a la energía. Sin embargo, persiste

GIPEM 07, octubre (2024)
pp. 62-68
www.gipem.co/revista-gipem
gipem_fiarman@unal.edu.co
©Derechos patrimoniales
Universidad Nacional de Colombia

el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU en 2015. Este incumplimiento refleja una desconexión entre la teoría y la práctica, subrayando las desigualdades existentes y evidenciando las barreras estructurales que impiden el desarrollo equitativo. Algunos fenómenos adversos se explican por estas circunstancias, revelando una realidad en la que las decisiones y acciones individuales y colectivas repercuten en el bienestar común. Así se confirma el adagio: "Se cosecha lo que se siembra" (Zuleta 1980; ONU 2015; CEPAL 2019).

Dando a entender la situación desigual de Cartagena, se remite a los cimientos de los términos cruciales para entender la desigualdad: "riqueza y mercancía". En las sociedades donde impera el régimen capitalista de producción, la riqueza se presenta como un inmenso arsenal de mercancías. Según Marx, la mercancía, en primer término, es un objeto externo que satisface necesidades humanas de cualquier clase. Gran parte de las actividades diarias requieren el uso de una mercancía explícita como la energía, sin embargo, aún existen áreas y comunidades sin acceso a esta necesidad básica. El crecimiento económico es fundamental para la reducción de la pobreza, pero la desigualdad puede limitar significativamente este proceso. Esto es especialmente evidente en regiones como Cartagena, donde las disparidades en el acceso a recursos básicos como la energía perpetúan la desigualdad y dificultan el desarrollo sostenible (Marx, 1842).

La propiedad privada en Cartagena es la más cómoda expresión de la producción y apropiación de mercancías como la energía, basadas en antagonismos de clase y en la explotación de unos por otros, fomentando sus riquezas. Así, las proyecciones personales rigen un emporio que va más allá de las cualidades sociales, ya que aquellos que trabajan no generan ganancias y aquellos que las obtienen no trabajan. Para entender la sociedad, es fundamental identificar quién está en posiciones de toma de decisiones, pues son ellos quienes determinan la forma en la que la sociedad funciona. Las decisiones se encuentran en manos de una concentrada red de grandes corporaciones, conglomerados y firmas de inversión. Ellos son los que poseen las mayores posiciones ejecutivas, los que poseen los medios y, dentro del sistema económico, los que mueven la mercancía, y alardean su riqueza, llamándose así propiedad privada. Ejercen control sobre los recursos con el fin de satisfacer sus intereses, imponiendo una afiliada limitante en el sistema político e ideológico (Marx 1842; Chomsky 2015).

En otras palabras, la propiedad privada opera dentro de brechas productivas que manejan únicamente el plano económico, donde generalmente subyace la desigualdad de ingresos, atravesando culturas y capacidades que vulneran la autonomía de las personas. El sector privado genera un centralismo total enfocado en el bien personal, olvidando que la crítica a una sociedad injusta basada en la explotación y dominación de clase sigue siendo fundamentalmente correcta. El combate por una organización social racional e igualitaria sigue siendo necesario y urgente. Todo debe proyectarse en un eje primordial de la igualdad, refiriéndose a los derechos económicos, culturales y sociales como horizonte normativo y práctico (Barcena 2016).

Bajo este contexto, algunas organizaciones sin ánimo de lucro alejándose del sector privado se han dado a la tarea de hacer presencia en el lugar para mitigar la problemática social. La Fundación Mamonal, por ejemplo, con programas de educación, salud y desarrollo social, busca mitigar el impacto negativo de este apartheid económico. A pesar de estos esfuerzos, las acciones tomadas por las empresas corresponden más a un actuar filantrópico que al desarrollo de medidas reales para solucionar esta problemática social. La vaga intención de actuar de las industrias en Mamonal no va de la mano de un desarrollo industrial sostenible. Las soluciones propuestas son en su mayoría acciones a corto plazo que no buscan atacar las problemáticas desde sus cimientos, sino que sirven como cortinas de humo que desvían la atención de la negligencia latente, priorizando los intereses económicos sobre los intereses de las comunidades que no son objeto de mercado.

Estas comunidades día a día ven cómo su situación se acentúa y, por parte de quienes se han lucrado del territorio, no se ve una postura clara sobre cuál será su actuar para revertir esta situación. La situación social en Mamonal es sumamente compleja por sí misma. Según la CREG, es fundamental que las políticas energéticas incluyan un enfoque de desarrollo sostenible que permita la inclusión social y la reducción de la pobreza. Las empresas, en conjunto con las entidades territoriales, deben unir esfuerzos para no solo mitigar, sino también dar soluciones eficaces que vayan de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejorando progresivamente la vida de miles de familias (Torres González 2014; Rojas 2005; Meza 2017; CREG 2012; Robert 1987).

La búsqueda constante de energía del sector energético de Colombia en el contexto de localidades vulnerables como la costa caribe colombiana provee un desafío significativo para el desarrollo social. Es necesario adaptar modelos que permitan integrar y generar viabilidad en el desarrollo de energía para contribuir al progreso social e igualitario. Analizando la meta de energía asequible, el informe de la International Energy Agency revela que la proporción de personas en el planeta con acceso a energía eléctrica aumentó del 83% en 2010 al 90% en 2019. Sin embargo, se prevé que para 2030 solo 280 millones de personas de los 940 millones que actualmente no tienen acceso a energía logren obtener este servicio. Cabe resaltar que las zonas rurales siguen siendo las más afectadas; la International Energy Agency señaló que en 2021 el 84% de las zonas sin electricidad eran rurales. Este panorama evidencia que, aunque ha habido avances significativos en la electrificación global, las brechas de acceso persisten y son más pronunciadas en áreas rurales y vulnerables. En Colombia, estas disparidades reflejan una urgencia crítica de implementar políticas energéticas inclusivas y sostenibles que no solo provean acceso a la energía, sino que también impulsen el desarrollo equitativo y mejoren la calidad de vida en las regiones más desfavorecidas. La energía no es solo una necesidad básica, sino un motor esencial para el desarrollo social y económico; por lo tanto, cerrar estas brechas de acceso es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa (Ríos 2022; International Energy Agency 2022; Reyes 2021).

Adicionalmente, como lo muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2019 alrededor de 26 millones de personas en la región no tienen acceso a la electricidad. Asimismo, el uso de combustibles fósiles representa casi el 75% de la matriz energética. Se afirma que para 2016 las inversiones se realizaban principalmente en energías hidroeléctrica y térmica con un 60% y 30% respectivamente, y solo un 5% se destinaba para energía nuclear, así como otro 5% para energía renovable no convencional. En el caso de la comunidad indígena de la Amazonía, esta utiliza generadores de electricidad a partir de diésel debido a que, por su ubicación, no están incluidos en la red nacional de energía interconectada. Al estar en zonas apartadas, existe una dificultad y altos costos para suministrar y transportar el diésel para los generadores de estas comunidades. Además, el uso de estos generadores implica riesgos para la salud como enfermedades respiratorias, además de una producción de energía discontinua. Este panorama evidencia una dependencia crítica de los combustibles fósiles y una insuficiente inversión en energías renovables, lo que agrava la situación de comunidades vulnerables y remotas. Es imperativo redirigir inversiones hacia fuentes de energía sostenible y renovable para garantizar un acceso equitativo y continuo a la energía, reducir los riesgos para la salud y promover la sostenibilidad ambiental. La situación de las comunidades indígenas de la Amazonía subraya la necesidad urgente de políticas energéticas que aborden tanto las barreras de infraestructura como las disparidades geográficas, asegurando que nadie quede atrás en la transición hacia una energía limpia y accesible (CEPAL 2019; International Energy Agency 2022).

El sector energético de la costa caribe colombiana, señalado por la banca de desarrollo territorial, es el encargado de la utilización de los recursos naturales renovables y no renovables para la producción de energía del país. De acuerdo con un informe publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), se muestra que debido a la duplicación de la población de Colombia entre 1975 y 2019, se ha generado un incremento significativo en el consumo de energía. Además, han existido variaciones en la composición de la matriz energética, reflejando cambios en la manera en que se utiliza y produce energía en el país. Este crecimiento demográfico y el consecuente aumento en la demanda de energía plantean desafíos cruciales para el desarrollo sostenible, ya que se requiere una gestión eficiente y equitativa de los recursos energéticos para satisfacer las necesidades crecientes sin comprometer la sostenibilidad ambiental ni aumentar las desigualdades sociales. Las políticas energéticas deben enfocarse en diversificar las fuentes de energía, promoviendo tanto las renovables como las no renovables de manera responsable, para asegurar un suministro continuo y equitativo que soporte el desarrollo económico y social de la región (UPME, 2023).

Por otro lado, la cobertura en áreas rurales enfrenta serios desafíos debido al incremento del consumo de energía, lo que resulta en interrupciones frecuentes. Las regiones centralizadas presentan aproximadamente 98 interrupciones de energía por año, afectando principalmente a las comunidades vulnerables. Estas poblaciones, debido a circunstancias económicas poco favorables, tienen una mayor probabilidad de sufrir de alguna forma de ambigüedad. La baja confiabilidad y seguridad de este servicio se refleja en el indicador de confiabilidad de suministro eléctrico del Reporte Global de Competitividad de 2017 y 2018, donde Colombia se ubicó en la posición 79 de 137 países. La insuficiente cobertura en zonas rurales y departamentos de la costa no solo afecta la calidad de vida de los residentes, sino que también tiene repercusiones significativas en la economía y competitividad del país. Este panorama evidencia la urgencia de implementar políticas y estrategias que mejoren la infraestructura energética y aseguren un suministro confiable y equitativo. El acceso constante y seguro a la energía es fundamental para el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades sociales, destacando la necesidad de una mayor inversión en energías renovables y en la expansión de la red eléctrica a áreas remotas (Rios, 2022; International Energy Agency, 2021).

La privatización del sector energético en Colombia ha tenido un impacto profundo en la generación y distribución de energía, afectando tanto la infraestructura como el acceso a la energía. Proeléctrica, que inició sus operaciones en 1993, se ha posicionado como un actor clave en este contexto. Esta empresa, parte de Interamerican Energy, gestiona la planta Termomorichal en los llanos orientales, utilizando motores de combustión interna que funcionan con excedentes de petróleo para alimentar otras empresas en la región. Con una capacidad instalada de 100 megavatios, aunque la capacidad neta es de 90 megavatios, Proeléctrica también está involucrada en proyectos de generación distribuida y en la provisión de energía para empresas como Panasa, Corona y Cemex. Además, Genser Power, otra empresa privada, desarrolla proyectos de energía renovable, como paneles solares para centros comerciales, promoviendo la autogeneración de energía. A pesar de los beneficios evidentes de la privatización, como la modernización de la infraestructura y la diversificación de las fuentes de energía, también se presentan desafíos significativos. La privatización ha llevado a una mayor participación de empresas privadas en el sector energético, lo que ha impulsado la innovación y la inversión en nuevas tecnologías. Sin embargo, esta situación también plantea problemas de equidad y regulación. Las empresas privadas, en su búsqueda de maximizar ganancias, pueden priorizar mercados lucrativos y descuidar a las comunidades más vulnerables. La falta de regulación efectiva y la concentración de recursos en áreas con mayor rentabilidad económica pueden perpetuar desigualdades en el acceso a la energía, afectando negativamente a las poblaciones en zonas rurales y menos

favorecidas. Este contexto subraya la necesidad urgente de políticas que equilibren la participación del sector privado con una regulación robusta que garantice un suministro de energía equitativo y confiable para todas las regiones. Es crucial que las políticas públicas aborden tanto los beneficios como los desafíos de la privatización, asegurando que las inversiones en infraestructura energética beneficien a todas las comunidades, especialmente a las más vulnerables, y fomenten un desarrollo sostenible y equitativo en el país (Power, 2023; Engels, 1848; Vilorio, 2022; Leibniz, 2016; CEPAL, 2019; Reporte Global de Competitividad, 2017-2018).

Proeléctrica se presentó como un proyecto financiado con capital privado desde 1990, siendo la primera empresa de generación privada de energía en Colombia. Esta iniciativa se amparó bajo el decreto 700 de abril de 1992, el cual permitía subsanar el déficit de generación de energía, mantener medidas que contribuyeran al saneamiento financiero de las entidades del sector eléctrico y adoptar disposiciones para que la Nación y dichas entidades contaran con recursos y herramientas legales adecuados para recuperar y fortalecer la capacidad de prestación del servicio eléctrico (Decreto, 1992).

La planta de generación térmica de Proeléctrica se ha convertido en un aliado estratégico, particularmente para el sector industrial, debido a su capacidad de actuar como un mitigador de problemas energéticos y suministrar energía a través de diferentes combustibles y aplicaciones industriales. Sin embargo, esta centralización energética y su enfoque en el mercado privado revelan una matriz de desigualdad profundamente arraigada en la estructura productiva. La energía producida por Proeléctrica forma parte del sistema interconectado nacional, contribuyendo a un 91% de la centralización del país. Sin embargo, su operación, especialmente en periodos de alta demanda, está orientada a satisfacer a clientes privados, como mineros, agroindustriales y petroleros, conforme al decreto 700 de 1992 (Semana, 2022).

Este modelo de desarrollo empresarial no se traduce necesariamente en una mejora de la calidad de vida para las poblaciones locales. Mamonal ejemplifica cómo una zona que genera significativos beneficios económicos puede carecer de servicios básicos. Los proyectos de desarrollo frugal, que buscan maximizar beneficios utilizando recursos mínimos y priorizando las necesidades básicas de la comunidad, se presentan como una alternativa viable. A pesar de los avances industriales, la persistente pobreza y la desigualdad en el acceso a servicios esenciales, como la energía, destacan la falta de interés en la equidad por parte de las industrias, incluyendo Proeléctrica (Chuquen, 2020).

El problema no radica en la oferta de energía, sino en la pobreza extrema que prevalece en la costa atlántica. La incapacidad de muchas personas para pagar el servicio eléctrico ha llevado a situaciones como el colapso financiero de Electricaribe. Las empresas de distribución no tienen incentivos para extender redes si los usuarios no pueden pagar, creando un círculo vicioso de pobreza y falta de acceso a servicios básicos (Guerra, 2021).

Este conflicto refleja una lucha de clases en la que la clase dominante defiende su poder y riqueza, apropiándose del excedente económico generado por la explotación de los trabajadores. La noción de igualdad debe basarse en un enfoque de derechos y de ciudadanía social, reconociendo que todas las personas tienen derecho a acceder al bienestar. Aunque varios actores, como organizaciones sociales, comunitarias y el sector privado, pueden contribuir al bienestar, es necesaria la acción deliberada del Estado para frenar las desigualdades socioeconómicas (Engels, 1848; Leibniz, 2016).

Promover la igualdad no significa solo garantizar oportunidades, sino también resultados. Las múltiples dimensiones de la desigualdad resultan en una distribución heterogénea de recursos y oportunidades, limitando la igualdad de oportunidades reales y la movilidad social. En este contexto, la igualdad de oportunidades debe ser vista como un resultado, no solo un punto de partida, subrayando la necesidad de políticas públicas inclusivas y orientadas hacia la igualdad efectiva (Guerra, 2021).

Referencias

- Albert. (2019). Sustainable frugal innovation. The connection between frugal, 237.
- Bárcena, A. (2016). La matriz de la desigualdad social en América Latina. Reunión de la Mesa Directiva de la conferencia nacional del desarrollo social, 96. Obtenido de https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/matriz_de_la_desigualdad.pdf
- Bnamericas. (2020). Los 11 principales proyectos de Colombia. Bnamericas, 9.
- Busch. (2021). Oxford Academic. Obtenido de Economy Society: <https://academic.oup.com/cjres/article-abstract/14/2/321/6276666?redirectedFrom=fulltext>
- CEPAL. (2019). Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos en Latinoamérica y el Caribe. Obtenido de https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ods7_c1900694_press_0.pdf
- Chomsky, N. (2015). Language and Thought.
- Chuquen, M. (2020). Universidad Distrital. En M. Chuquen, Análisis del riesgo de la cobertura de energía firme en Colombia a mediano plazo (págs. 23-33). Bogotá. Obtenido de Análisis del riesgo de la cobertura de energía firme en Colombia a mediano plazo.
- Colombia, R. d. (2014). Planeación estratégica año 2011-2014. Obtenido de Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF: <https://uiaf.gov.co/sites/default/files/2022-07/documentos/archivos-anexos/Planeacion-Estrategica-2011-2014.pdf>
- CREG. (9 de diciembre de 2012). Comisión de Regulación de Energía y Gas. Obtenido de https://creg.gov.co/sites/default/files/corpoema_zni_aom.pdf
- Gonzales, M. A. (2011). DocPlayer. Obtenido de Análisis socioeconómicos: Un aporte desde la academia a la actividad legislativa: <https://docplayer.es/56114327-Analisis-socioeconomicos-un-aporte-desde-la-academia-a-la-actividad-legislativa.html>
- Guerra, C. Y. (2021). Desigualdad y pobreza en la costa atlántica colombiana. Boletín OCSA No. 27, 13-14.
- IEA. (2021). United Nations Statistics Division. Obtenido de The World Bank, World Health: https://trackingsdg7.esmap.org/data/files/download-documents/2021_tracking_sdg7_report.pdf

- Libniz. (2016). Digital Archiv. Obtenido de Land-use in the electric Colombian system: hidden impacts:
<https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLrjhwJRFvBDPfQxgqmBTmVkfBkhVrg?projector=1>
- Marx, K. (1842). El Manifiesto Comunista. En F. Engels y K. Marx, El Manifiesto Comunista (págs. 48-127). Bruselas: Herramienta Editions.
- Meza, S. (diciembre de 2017). Incidencias de la responsabilidad social de empresas del sector industrial de Mamonal en la sostenibilidad de la localidad industrial de la bahía. Gerencia Libre.
- ONU. (2015). Organización Nacional de las Naciones Unidas. Obtenido de <https://www.un.org/es/>
- Power, G. (2023). Genser Power. Obtenido de <https://genserpower.com/quienes-somos/>
- Proeléctrica. (1993). ANDEG. Obtenido de <https://www.andeg.org/empresas-asociadas/proelectrica/>
- Reyes, E. F. (2021). Análisis energético Exergético y propuestas de mejoras para una planta de 90MW operando bajo ciclo STIG. Universidad Nacional de Colombia.
- Rios, J. D. (2022). La viabilidad en el desarrollo de energía renovable: innovación frugal co-creando con comunidades de la costa caribe colombiana. Universidad de los Andes.
- Robert. (4 de agosto de 1987). World Commission of Environment and Development. Obtenido de https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
- Rojas Merlano, L. C. (2005). El balance social de Coopmamonal como medio para proponer la creación de nuevas unidades productivas en las comunidades aledañas a la Zona Industrial de Mamonal. Universidad Tecnológica de Bolívar. 17-30.
- Rojas, L. C. (2005). Universidad Tecnológica de Bolívar. Facultad de Ciencias Tecnológicas de Cartagena. Obtenido de El balance social de Coopmamonal:
<https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/handle/20.500.12585/3546/0032190.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Torres González, A. d. (2014). Repositorio Uni Cartagena. Obtenido de Repositorio Institucional:
<https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/2481>
- Xm. (2023). Sistema Interconectado Nacional. Obtenido de SIN XM:
<https://www.xm.com.co/nuestra-empresa/nosotros/quienes-somos>
- Zuleta, E. (1980). Elogio de la dificultad. Revista Científica Guarracuco, 2(1), 4-7.